



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Roberto Alirio Martínez Maya
DEMANDADO	Protección S.A. y Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-008-2019-00401
TEMA	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Adiciona y confirma sentencia

El veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **194** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **ROBERTO ALIRIO MARTÍNEZ MAYA** contra la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, con radicado **05-001-31-05-008-2019-00401**.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos del poder conferido por el doctor JUAN PABLO ARANGO BOTERO, en calidad de representante legal y de vicepresidente comercial y de mercadeo de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A., de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la Dra. LUZ ADRIANA PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.036.625.773 y portadora de la tarjeta profesional N° 242.249 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de la entidad hasta su culminación en el presente proceso judicial.

- **PRETENSIONES**

El demandante pretende se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, y por ende, siempre estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad. Como consecuencia, se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES, todos y cada uno de los aportes, y a reconocer la pensión si al momento de la sentencia acredita los requisitos para acceder a la pensión, esto es, el 28 de agosto de 2022, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación y costas procesales.

Subsidiariamente solicita se reconozca a título de indemnización de perjuicios como mesada pensional el valor equivalente a lo que este hubiese recibido si estuviera en el RPM, junto con los intereses moratorios o indexación y las costas procesales.

- **HECHOS**

Frente a los hechos la demandante manifiesta que nació el 28 de agosto de 1960. Que se afilió al ISS el 12 de noviembre de 1980 y cotizó hasta el 31 de agosto de 1995 un total de 768 semanas. Que se trasladó al PROTECCIÓN S.A. el 4 de agosto de 1995. Que para la fecha de traslado laboraba para Industrias Alimenticias Noel como operario. Que ha cotizado desde su afiliación al RAIS un total de 1.210 semanas. Que en toda su vida laboral cuenta con 1.979 semanas. Que no se le suministró información adicional ni una asesoría detallada al momento de cumplir 52 años de edad. Que PROTECCIÓN S.A. le realizó una proyección en donde le indicó que su mesada pensional sería de \$1'396.752, pero no se le suministró ningún otro documento. Que le solicitó a COLPENSIONES la ineficacia o nulidad de la afiliación, la cual no salió avante. Y que recibiría una mayor mesada en el RPM.

- **CONTESTACIONES:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

Frente a los hechos de la demanda manifestó que es cierta la edad. Que no le consta el vínculo sostenido con el ISS. Que es cierto su traslado, y las semanas cotizadas. Que no es cierto que no se le haya suministrado información amplia y suficiente, ya que al momento de la filiación se le explicó que podía acceder aun a pensión antes de edad, siempre y cuando reuniera el capital para pensionarse. Que se le realizó una reasesoría el 26 de julio de 2012. Que es cierto, lo relacionado a la mesada pensional que recibiría. Que si se le dio respuesta a la solicitud elevada. Que no le consta la solicitud elevada a COLPENSIONES. Y que no le consta el valor de la mesada pensional que sería reconocida en el RPM. Se opuso a todas las pretensiones, y planteo varias excepciones de mérito.

✓ COLPENSIONES:

Frente a los hechos de la demanda manifiesta que es cierta la edad del demandante y su afiliación al ISS. Que se acepta el traslado que efectuó a PROTECCIÓN S.A., pero no le constan la información suministrada. Que no le constan las semanas cotizadas. Que es cierta la reclamación elevada a COLPENSIONES, pero que no le constan las liquidaciones de la mesada pensional que obtendría en el RPM. Se opuso a todas las pretensiones. Y planteó varias excepciones de mérito.

• **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 31 de julio de 2020, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** ineficaz el traslado del demandante realizado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A., argumentando que de acuerdo a la línea jurisprudencial de la Corte, las entidades administradoras deben suministrar al afiliado información cierta, clara, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias de los cambios de régimen pensional, y que no encuentra el despacho que las entidades demandadas hayan cumplido con el deber de ofrecer dicha información completa no solo de las ventajas sino también de las desventajas y consecuencias del traslado al RAIS, quedando así demostrado, la ausencia de los deberes reiterados jurisprudencialmente.

ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPESIONES dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, tales como cotizaciones, sumas adicionales con sus frutos e intereses y cuotas de administración.

ORDENÓ a COLPENSIONES permitir el traslado del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, conservando los beneficios que tenía al momento de su traslado.

ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de la pretensión encaminada a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y a PROTECCIÓN S.A. de las pretensiones relativas a que se ordene el reconocimiento de esa misma prestación en los términos que se hubiera reconocido de permanecer en el RPM.

Y, **CONDENÓ** en costas procesales a PROTECCIÓN S.A.

- **APELACIÓN:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

La sentencia de primera instancia fue recurrida por la accionada, quien manifestó que está inconforme parcialmente con la sentencia, toda vez que no se deben trasladar las cuotas de administración, pues se realizaron gestiones de buena administración de recursos de la cuenta individual y ordenar el traslado de este concepto sería un castigo por su excelente labor. Que los descuentos de las cuotas de administración se realizan con autorización expresa del artículo 20 de la ley 100 de 1993, que se efectúan tanto en el RAIS como en el RPM. Que si al trasladar este concepto se estaría generando un enriquecimiento sin causa para Colpensiones, ya que se estarían devolviendo unas cuotas de administración de unos rendimientos que jamás administró el fondo público, y que esta cuotas pueden prescribir. Y que ordenar trasladar este concepto sería un perjuicio, y no obra prueba de que haya existido un nexo causal en el que se pueda demostrar que PROTECCIÓN S.A. generó un daño.

De igual forma, la anterior decisión será revisada en **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** con ocasión de las condenas impuestas a COLPENSIONES.

- **ALEGATOS:**

- ✓ DEMANDANTE:

La apoderada del actor, expresa que se debe confirmar la sentencia, toda vez que al demandante no se le brindó una asesoría, clara, completa y eficiente, que le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía. Y que ha sido reiterada la jurisprudencia de la Alta Corte en el sentido de indicar que el deber de información se encuentra en cabeza de los fondos privados y que no se puede concluir tan solo con la firma en el formulario de afiliación.

- ✓ PROTECCIÓN S.A.:

En su recurso de apelación, manifestó que no está de acuerdo con el traslado de las cuotas de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima, toda vez que dicha condena resulta ser sumamente onerosa para la entidad, pues estos conceptos fueron trasladados conforme al destino que les da la ley. Que en este sentido son sumas de dinero que ya no reposan en manos de la AFP, y que si bien resultare procedente trasladar los montos correspondientes a las cotizaciones, gastos de administración, seguro previsional y garantía de pensión mínima, se deben excluir de ello, los rendimientos generados como consecuencia del ejercicio juicioso por parte de PROTECCIÓN S.A como administradora de dichos dineros.

- ✓ COLPENSIONES:

Manifestó en sus alegatos que se debe confirmar la sentencia de primera instancia y adicionar la misma, en el sentido de condenar a PROTECCIÓN S.A. a realizar la devolución de las cuotas o gastos de administración y seguros previsionales debidamente indexados al momento del pago.

- **DECRETO 806 DE 2020:**

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

CONSIDERACIONES

Los problemas jurídicos a resolver de conformidad con el recurso interpuesto y en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, será *i)* determinar si el acto jurídico de afiliación del señor ROBERTO ALIRIO MARTÍNEZ MAYA a PROTECCIÓN S.A., fue válido, o si por el contrario es ineficaz; *ii)* consecuentemente si procede la declaratoria de la ineficacia, se deberá analizar los conceptos a devolver por el fondo privado; y, *iii)* la operancia o no de la excepción de prescripción de la acción.

i. Acto jurídico de la afiliación y precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional:

Para comenzar, esta Sala pasará hacer un recuento breve de la jurisprudencia de esa alta Corporación de Justicia, que estructura el tema.

Advierte la Corte que el traslado de régimen debe estar precedido de toda información relevante para la toma de la decisión. Que es necesario que el fondo de pensiones proporcione a quien pretenda captar como su afiliado, una información suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras. Que la figura de la ineficacia es una consecuencia prevista en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo de pensiones omitió suministrar información que permitiera la selección de régimen de forma libre y voluntaria, acto indebido de esta, que tiene como

consecuencia no producir sus efectos propios. Que el estatuto Financiero de la época en los artículos 97 y siguientes consagró que las administradoras debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, lo siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. Y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

Así las cosas, lo dicho anteriormente constituye sustento que permite deducir las siguientes reglas:

- (i) Las administradoras de pensiones tienen a su cargo la obligación de información de conformidad con lo establecido en el literal b del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
- (ii) La información del traslado de régimen debe ser de transparencia máxima, detallada y documentada acerca de la incidencia que pueda tener frente a sus derechos prestacionales, de modo que no basta con explicar solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende

trasladarse, sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos proyecte la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Y,

- (iii) La carga de la prueba de demostrar que se informó de forma detallada, clara y documentada recae en la administradora de fondos de pensiones.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos:

- (i) Desde la fundación de las AFP.
- (ii) Desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 incorporado en el Decreto 2555 de 2010.
- (iii) Y, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015. y en la circular 16 de 2016, la cual entrega instrucciones generales para la remisión de información financiera para efectos de inspección, vigilancia y control.

La determinación a tomar, tiene como soporte en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021.

En el caso objeto de estudio, sobre los pormenores que rodearon el traslado del demandante, del interrogatorio de parte se desprende que se trasladó en el año de 1995 a PROTECCIÓN S.A. cuando unos asesores fueron a la empresa donde laboraba y le manifestaron que podría pensionar más rápido

con menos edad y con mas plata, pero nunca le realizaron una proyección ni le manifestaron sobre los requisitos que debe tener en cuenta en el RAIS. Y que, si recibió dos reasesoría, una donde le dijeron que quedaba con la misma plata que en COLPENSIONES, y otra donde obtendría una mesada más alta que el fondo público.

Sobre la carga de la prueba es importante hacer la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado. Así mismo, contrastando toda la jurisprudencia citada, debe decirse que la carga de la prueba recae en la administradora, puesto que, como entidad especializada, cuenta con los conocimientos para que a través de sus asesores hagan conocer a los afiliados que pretende captar los pormenores de sus situaciones pensionales y las consecuencias que trae elegir el Régimen al que le proponen afiliarse.

Con respecto a lo anterior, las afirmaciones realizadas por el demandante no fueron desvirtuadas procesalmente por PROTECCIÓN S.A., toda vez que, pese a que la entidad administradora anexó el documento visible de folios 114 del expediente digital, esto es, el formulario de afiliación, mismos que fue suscrito por el demandante, que permite pensar en un principio que si existió una asesoría acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro, lo cierto es que este documento no es prueba suficiente para determinar que efectivamente al accionante se le haya brindado una completa asesoría, acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro.

Debe repetirse que la labor de los asesores de los fondos privados, en la etapa pre-negocial, anterior a la materialización del consentimiento, consistía en brindar una información transparente, completa, detallada y comprensible, puesto que, lo que se revisa es si la administradora de fondos de pensiones

que pretendía captar al demandante como su afiliado cumplió con los imperativos profesionales de información.

Vale la pena manifestar que, por el hecho de que el demandante firmara el formulario de vinculación, donde se hace constar que la escogencia del régimen de ahorro individual se efectúa de forma “libre, espontánea y sin presiones”, no implica que conociera las consecuencias que conlleva el cambio de régimen pensional.

También es importante advertir nuevamente, que, si bien la mayoría de los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esta circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

No puede pasar por alto esta Sala que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto, por tal razón no es procedente analizar el caso de autos bajo lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993, en lo que tiene que ver con el traslado de régimen cuando al afiliado le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Una vez analizado el acto primigenio, esta Sala debe señalar que si bien al actor se le realizó una reasesoría el día 26 de julio de 2012 (folio 115), dicha actuación es muy posterior a la asesoría recibía en la primera oportunidad en el año de 1995, la cual generó la ineficacia, y, por lo tanto, es desde allí que todas las actuaciones no producen sus efectos propios.

Con respecto a la información inicial que se le debía brindar al demandante para la fecha de traslado, en las providencias SL1688-2019, SL4360-2019 y SL4426-2019, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: primer periodo, desde la fundación de las AFP; segundo momento, desde la expedición de la

Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010; y tercer momento, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS del actor fue el 04 de agosto de 1995, lo que se corresponden con el primer momento, ciclo para el cual según lo expresado en la sentencia SL-1452-2019 la obligación de la administradora privada demandada era la de brindar una información necesaria y transparente, lo cual brilló por su ausencia.

Se tiene entonces que, PROTECCIÓN S.A., no cumplió con la carga de probar el haber realizado en la etapa previa a la suscripción del formulario de afiliación, una asesoría lo suficientemente clara, detallada y concreta en relación con su situación particular, por tanto, debe concluirse que es desde allí que el traslado resulta ineficaz, generando como consecuencia que la afiliación válida es la efectuada al régimen de prima media, debiéndose en consecuencia **CONFIRMAR** la providencia de primera instancia, en tal sentido.

ii. Efectos de la ineficacia y conceptos a devolver por el fondo privado:

Con relación a los **VALORES A DEVOLVER POR EL FONDO PRIVADO**, la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que la AFP que dio lugar a ello, siempre y cuando se hayan generado las debidas cotizaciones, traslade a COLPENSIONES: (i) la totalidad del capital ahorrado, (ii) los rendimientos financieros obtenidos y (iii) los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

De igual forma, también debe sumarse que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida,

pues debe garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante no se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputaron a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el demandante hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES.

Pues bien, conforme a la apelación y alegatos interpuestos, hay que anotar que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que *“la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.”*

Por lo anterior, si bien la juez ordenó correctamente devolver a **PROTECCIÓN S.A.** lo correspondiente a las cuotas de administración, también este fondo deberá devolver los seguros previsionales, los cuales se componen de la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, ambos conceptos debidamente indexados, con cargo a sus propios recursos, y lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016, debiéndose **ADICIONAR** la sentencia, para en su lugar **ORDENARLE** a **PROTECCIÓN S.A.** incluir en los valores por entregar a COLPENSIONES, estos conceptos

iii. Excepción de prescripción de la acción.

En lo que tiene que ver con la excepción de **PRESCRIPCIÓN**, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos,

postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Así las cosas, se **ADICIONARÁ** y **CONFIRMARÁ** la sentencia revisada en vía de apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

Las costas de primera instancia como lo dijo la juez. En esta instancia son a cargo PROTECCIÓN S.A. al no salir avante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia en lo que tiene que ver con la declaración de la ineficacia del traslado efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por **PROTECCIÓN S.A.**

SEGUNDO: Se **ADICIONA** la sentencia, en cuanto a los valores a devolver al fondo público, y en su lugar, se le **ORDENA** a **PROTECCIÓN S.A.**, a trasladar a **COLPENSIONES**, además de lo ordenado por la juez, los seguros previsionales, los cuales se componen de la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, debidamente indexados, al igual que las cuotas de administración, con cargo a sus propios recursos, así como, lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016.

TERCERO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia

CUARTO: Costas procesales y agencias en derecho como se dejó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 113 del 30 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>